

NOTA

de la	Secretaría
al	Grupo XI «Europa Social»
Asunto:	Nota resumida de la reunión del 11 de diciembre de 2002

1. Valores esenciales de la Unión

A propósito de los valores esenciales relativos al ámbito social que deberían figurar en el artículo 2 del anteproyecto de Tratado constitucional, los miembros del Grupo se pusieron rápidamente de acuerdo sobre los principios de que el artículo 2 debería ser corto y preciso y de que era necesario hacer una distinción entre los valores y los objetivos, pudiendo dividirse cada valor en varios objetivos. Así, aunque la totalidad del Grupo reconoció como un valor la igualdad de trato y de oportunidades, la promoción de la igualdad de trato entre hombres y mujeres se reconoció como un objetivo derivado de dicho valor.

El Presidente recordó a los miembros del Grupo que el artículo 7 TUE daba la posibilidad de aplicar sanciones a los Estados miembros que no respetaran los principios (o valores) de la Unión. En el artículo 45 del anteproyecto de Tratado constitucional se contempla una disposición similar.

El Grupo se pronunció también en el sentido de que no se debía volver a debatir la Carta Europea de los Derechos Fundamentales pero que se podía hacer una referencia a ésta en el artículo.

El Grupo elaboró una primera lista de los valores que podrían figurar en el artículo 2, que comprende los conceptos siguientes:

- la igualdad, en el sentido de la igualdad de trato (no discriminación) y de la igualdad de oportunidades,
- la solidaridad, que algunos prefirieron al concepto de justicia social propuesto por determinados miembros del Grupo. Se sugirió que la justicia social figura mejor entre los objetivos.
- la dignidad de la persona,
- la solidaridad, en particular entre generaciones,
- la democracia.

Determinados miembros propusieron también el concepto de durabilidad para la economía, la política social y el medioambiente recibiendo este concepto una acogida favorable por parte del Grupo. Sin embargo, varios miembros consideraron que la durabilidad no constituía un valor, sino uno de los objetivos principales.

Se propuso asimismo el concepto de tolerancia. No obstante, determinados miembros consideraron que el concepto de tolerancia no era suficiente y que se debía precisar mediante una referencia al antirracismo y al carácter multicultural y multiétnico de la sociedad europea.

El Presidente invitó a los miembros a que presentaran propuestas de textos relativos al artículo 2 del anteproyecto de Tratado Constitucional.

2. Objetivos generales de la Unión

A propósito de los objetivos generales de la Unión que han de figurar en el artículo 3 del anteproyecto de Tratado Constitucional, el debate se centró en los elementos siguientes:

El Grupo debatió la cuestión de si los objetivos de la Unión debían corresponder necesariamente a ámbitos de competencia de la Unión o si dichos objetivos debían ir también dirigidos a los Estados miembros en la esfera de sus competencias, sabiendo que la política económica es competencia de los Estados miembros; la política social, una competencia compartida, y el empleo, una competencia complementaria de la Unión. Varios miembros insistieron no obstante en la necesidad

de alcanzar un equilibrio entre los objetivos y los instrumentos para llevarlos a buen puerto. La opinión que se perfiló en el Grupo fue que los objetivos no debían limitarse a lo que podía realizar la Unión por sí misma, sino que debían también ir dirigidos a los Estados miembros dado que la Unión dispone de competencias complementarias en esos ámbitos.

Varios miembros insistieron en la necesidad de situar el pleno empleo entre los objetivos principales de la Unión, recordando que el Consejo Europeo había designado, en Lisboa y Barcelona, el pleno empleo como un objetivo esencial de las políticas económicas y sociales. Algunos otros miembros indicaron, no obstante, que un elevado nivel de empleo correspondía más al objetivo que debía perseguir la Unión y que lo importante era establecer condiciones favorables a la creación de empleo. A este respecto se puso de relieve el concepto de "employability".

Varios miembros destacaron que a este objetivo debía añadirse la igualdad de oportunidades mencionada entre los valores, pero que debería ser sobre todo un objetivo, consistente, por ejemplo, en el libre acceso a la formación profesional, que está vinculado al principio del derecho al trabajo que figura en el artículo 15 de la Carta de los Derechos Fundamentales.

Se citaron como objetivos que debían figurar en el artículo 3: la economía social de mercado, la cohesión económica y social, la creación de puestos de trabajo estables, la protección social universal y el acceso a servicios de interés general eficaces y de calidad.

Determinados miembros recordaron que el texto del artículo 3 debía ser equilibrado en el sentido de que había de figurar en el mismo la dualidad del objetivo, es decir, un elevado nivel de protección social en una economía de mercado que garantice la competitividad. Algunos consideraron que el texto del anteproyecto de Tratado Constitucional cubría bien la totalidad de los objetivos que se pretende alcanzar.

Varios miembros también señalaron que se debía evitar entrar en los medios, para limitarse a los objetivos.

El Grupo aprobó ampliamente que el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres debía figurar entre los objetivos, así como la promoción de la integración social, junto al objetivo de un elevado nivel de protección social que figura en el actual artículo 2 TCE. A este respecto, un miembro sugirió como objetivo garantizar la protección social universal.

El Grupo insistió en que no se debía retroceder en relación con los objetivos actualmente mencionados en el artículo 2 TCE.

Determinados miembros pidieron que ciertos objetivos específicos que figuran en el artículo 3 TCE se declarasen objetivos generales, por ejemplo los objetivos en materia de sanidad y de educación. , Según determinados miembros, la lucha contra la inseguridad económica y la exclusión social también debería figurar en el artículo 3 del anteproyecto de Tratado constitucional.

En cuanto a los servicios de interés general, se insistió en que estaban vinculados al acceso a los servicios básicos (sanidad, educación...) para todos los ciudadanos que, en opinión de muchos miembros, debía figurar entre los objetivos. Los servicios de interés general son, según éstos, un medio para realizar dicho objetivo. Por esta razón, varios miembros solicitaron una disposición horizontal que garantice el acceso, y por tanto la prestación, de los servicios básicos, sin excluir necesariamente la aplicación de las normas del mercado interior a los prestatarios de dichos servicios.

Varios miembros mencionaron la promoción de la economía social de mercado o del modelo social europeo como un objetivo de la Unión para salvaguardar tanto el sistema de protección existente como la competitividad de la economía europea.

Se señaló que el desarrollo sostenible económico y social debían figurar entre los objetivos.

Por último, determinados miembros pidieron que la cohesión económica y social entre los Estados y las regiones figurara entre los objetivos.

3. Competencias de la Unión

El Grupo se preguntó sobre las competencias actuales que figuran en el Tratado. Mientras que determinados miembros consideraban que la gama actual de competencias era suficiente, otros pidieron que la Unión pudiera legislar en los ámbitos actualmente excluidos por el apartado 6 del artículo 137 TCE, a saber las retribuciones, el derecho de asociación, los derechos de huelga y de cierre patronal. Determinados miembros pidieron que, si debían ampliarse las competencias de la Unión, las nuevas competencias se incluyeran en la categoría de las competencias complementarias.

Otros se opusieron firmemente a dicha ampliación de competencias, insistiendo en que el derecho de huelga no debería regularse a escala europea. Asimismo, en lo referente a las retribuciones, indicaron que éstas se determinan contractualmente por medio de convenios colectivos nacionales y que no era deseable fijarlas a escala europea. Los partidarios de la inclusión de las retribuciones entre las competencias de la Unión adujeron por su parte que no se trataba de fijar los salarios a escala europea, sino de prever el derecho de los interlocutores sociales de discutir al respecto.

Se señaló que la verdadera línea divisoria en la distribución de competencias en materia social venía determinada por el carácter de la acción de la Unión, que bien legisla materialmente, o bien se limita a acompañar las políticas de los Estados miembros. A este respecto se destacó que cuando se trata de competencias complementarias, la coordinación de las políticas de los Estados miembros debería realizarse a escala de la Unión por medio de orientaciones generales adoptadas por ésta.

Determinados miembros insistieron en que no podía haber verdadero mercado interior sin normas sociales uniformes, sin armonización social y sin servicios de interés general, y que las competencias en materia social debían articularse en relación con las competencias en el ámbito económico.

Otros miembros destacaron que la Europa social existe y que hay una legislación europea muy abundante en el ámbito social (alrededor de 230 textos legislativos, precisaron), pero que se precisaba una mayor coordinación entre las orientaciones generales de política económica y la política de empleo, tal como subrayó el Grupo de trabajo sobre la gobernanza económica.

También se abordó la cuestión de la unanimidad requerida en el Consejo para las materias que figuran en el apartado 3 del artículo 137 TCE. Algunos se preguntaron por la realidad de dichas competencias, ya que la unanimidad hace muy difícil la adopción de cualquier legislación comunitaria en dichos ámbitos. Se citaron varios ejemplos, en particular en materia de seguridad social de los trabajadores migrantes o en materia de transferencia de derechos adquiridos en los regímenes de seguridad social.

A este respecto, la opinión general del Grupo fue que era de desear que se previese la mayoría cualificada en materia de transferencia de derechos en los regímenes de seguridad social vinculados a actividades transfronterizas. El Grupo consideró unánimemente que la Unión no debía implicarse en la gestión de los regímenes de seguridad social y que, en este capítulo, su ámbito legítimo de acción se limitaba a las situaciones transfronterizas.

Determinados miembros pidieron que se generalizara la votación por mayoría cualificada en todo el ámbito social y fiscal.

Algunos miembros pidieron asimismo que la competencia en materia de igualdad entre hombres y mujeres fuera más allá del ámbito de las oportunidades en el mercado laboral y del trato en el trabajo, para cubrir todos los ámbitos de la Unión.

Varios miembros solicitaron también un refuerzo de las disposiciones relativas a los servicios de interés general que figuran actualmente en el artículo 16 TCE. A este respecto, la Comisión anunció una próxima contribución técnica.

Varios miembros también lamentaron la limitación de las disposiciones actuales del Tratado en materia de protección de la salud (artículo 152 TCE) y defendieron una redacción del Tratado Constitucional que integrase la evolución de la jurisprudencia en dicho ámbito.

Varios miembros del Grupo recordaron que el principio de subsidiariedad también debía aplicarse en el ámbito social y que cada Estado miembro debía disponer de la posibilidad de tomar decisiones relativas a su nivel de protección social, mientras que la Unión sólo debía actuar en caso de situación transfronteriza o con implicaciones en el mercado interior, por ejemplo en materia de compatibilidad de los regímenes de seguridad social en caso de migración dentro de la UE o en razón de problemas de competencia generados por las legislaciones en materia de tiempo de trabajo, en particular en el ámbito del transporte por carretera.

Mientras que determinados miembros afirmaban que la política de competencia y el mercado interior tenían consecuencias nefastas en materia de protección social, otros afirmaron que el mercado interior y las normas de competencia que le son indisociables no eran en absoluto las

causas de la erosión social, sino que, por el contrario, sólo una economía competitiva podía contribuir a la prosperidad necesaria para perpetuar los sistemas de protección social. Otros miembros veían el mercado interior como una herramienta para incrementar el bienestar de la población, herramienta en la que los servicios de interés general se integraban a fin de que, en el marco de las normas de competencia, todos tuvieran acceso a los servicios básicos cualesquiera que fuesen sus medios financieros.

Varios miembros expresaron el deseo de que las disposiciones del Tratado relativas a las competencias en materia social se reagruparan en un solo capítulo.
